

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ
DEMANDADOS	*AFP PORVENIR S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS *NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO *COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-012-2017-00990-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de sobrevivientes madre de afiliado fallecido – RAIS- dependencia económica.
DECISIÓN	Modifica y Confirma

Medellín, once (11) de julio de dos mil veintidós (2022)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZALEZ** contra la **AFP PORVENIR S.A.**, y dentro del cual se integró a **COLPENSIONES** y al **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 030**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, conocer, por parte de este colegiado, el recurso de apelación interpuesto por PORVENIR S.A. en contra la sentencia que profirió el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 31 de enero de 2020, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis: Que el 1º de mayo de 2010 falleció por causas de origen común el señor ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA, hijo de la señora EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZALEZ, quien al momento de su deceso se encontraba afiliado a PORVENIR S.A, pero también había previamente realizado cotizaciones al entonces Instituto de los Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, habiendo dejadas cotizadas en los tres años anteriores a su muerte más de 50 semanas, entre ambas administradoras.

Refirió que la señora EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZALEZ elevó reclamación de la pensión de sobrevivientes a PORVENIR S.A. el día 4 de junio de 2014, y la entidad emitió comunicado el 11 de septiembre de 2014 negando el reconocimiento, aduciendo que el causante no dejó acreditado el mínimo de 50 semanas en los 3 años anteriores a su deceso, ni se demostró la dependencia económica del mismo.

Añadió que, ante la negativa, presentó solicitud de devolución de saldos, y que la entidad, mediante comunicado del 9 de diciembre de 2014 le resolvió que su cuenta de ahorro estaba en ceros, y que una vez se acreditara el bono pensional procederían a devolvérselos.

Insistió en que dependía económicamente del causante, que es ama de casa, no recibe ninguna pensión ni ingreso que le permita asumir su manutención, ante la pérdida del hijo que la sostenía.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se declare que a la señora EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ, le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes en razón del fallecimiento de su hijo ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA y que, como consecuencia, se condene a la AFP PORVENIR S.A. a reconocer y pagarle la pensión de sobrevivientes de forma retroactiva, desde el 1º de mayo de 2010, fecha de fallecimiento del causante, las mesadas adicionales, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas, lo que ultra y extra petita se halle probado y las costas procesales del juicio.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, la demandada PORVENIR S.A, como las integradas a la Litis describieron el traslado de la demanda, a través de sus respectivos apoderados judiciales.

Contestación de PORVENIR S.A: Rindió el informe solicitado, según escrito visible a folios 60 y siguientes del PDF 1 del expediente digital. A través del mismo, aceptó el parentesco entre madre-hijo, el deceso de este último y la reclamación elevada, así como la negativa del derecho por parte de la entidad por las razones explicadas, negando los demás hechos; se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y, propuso las excepciones de mérito de *“Falta de causa para pedir, Inexistencia de las obligaciones demandadas, Pago, Compensación, Buena fe y Prescripción”*.

Contestación del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – Oficina de Bonos Pensionales (entidad integrada a la Litis): Dicha entidad describió el traslado de la demanda, a través de escrito visible a folios 109 y siguientes del expediente, a través del cual manifestó que no le constaban los hechos de la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y, formuló los medios exceptivos de *“BONO EMITIDO, REDIMIDO Y PAGADO y la EXCEPCIÓN GENÉRICA”*.

Contestación de COLPENSIONES – entidad vinculada por pasiva (PDF 9 del expediente digital): Aceptó en su mayoría los hechos de la demanda; se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y, formuló las excepciones de *“COBRO DE LO NO DEBIDO E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS E INDEXACIÓN, BUENA FE DE COLPENSIONES, PRESCRIPCIÓN, EXCEPCIÓN INNOMINADA, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS y COMPENSACIÓN”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 31 de enero de 2022, la Juez de conocimiento: **i)** DECLARÓ que el joven ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA dejó causada la pensión de sobrevivientes en favor de su madre, la señora EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ; **ii)** Condenó a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la señora EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZALEZ la suma de **\$106.993.592**, a título de retroactivo de la pensión de sobrevivientes causado entre el 4 de junio de 2011 y el 31 de enero de 2022; **iii)** Condenó a la entidad a continuar reconociendo una mesada pensional por valor de un salario mínimo legal mensual vigente a partir del 1º de febrero de 2022 y en lo sucesivo sobre 14 mesadas pensionales al año; **iv)** Impuso la obligación de pagar a la demandante los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 4 de agosto de 2014 y hasta el momento del pago, calculados sobre el retroactivo adeudado; **v)** Autorizó a PORVENIR S.A. realizar los descuentos con destino al sistema de salud; **vi)** Facultó a la entidad a compensar las sumas que hubiere pagado a la demandante a título de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes; **vii)** Declaró probada la excepción de prescripción para todas aquellas mesadas pensionales causadas antes del 4 de junio de 2011, y; **viii)** le impuso condena en costas a PORVENIR S.A. en favor de la demandante, en la suma de **\$5.300.000**.

Advirtió a COLPENSIONES y a la OFICINA DE BONOS PENSIONALES del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, que deberán hacer el trámite interadministrativo necesario, de manera conjunta para realizar el

traslado de los recursos a PORVENIR S.A., a efectos de que se acredite en su cuenta el bono pensional.

Como fundamento de su decisión, indicó la a quo que en el expediente se encuentran sendas historias laborales del causante, en el entonces Instituto de los Seguros Sociales y en PORVENIR SA, alcanzando a reunir en los 3 años anteriores a su muerte (entre el 1 de mayo de 2007 y el 1 de mayo de 2020), un total de 60 semanas cotizadas, ya que, si bien a PORVENIR S.A. solo registra haber cotizado 4 semanas en ese interregno, tenía 56 semanas cotizadas al ISS, acreditando la densidad mínima exigida por las normas legales y dejando causada la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios.

Adujo que no existe ninguna razón jurídica para que el bono pensional del causante en Colpensiones se haya liquidado en ceros y, atribuyó esa circunstancia a una falta de gestión administrativa en cabeza de COLPENSIONES, ya que en historia laboral aportada se evidencia que el causante cotizó, entre el 18 de enero de 1993 y el 31 de julio de 2009 un total de 367,71 semanas, las cuales debieron aparecer al momento de la redención del bono pensional. Añadió que, ante esta circunstancia, se hace imperioso que en virtud de un trámite inter administrativo, los recursos que representan esas 367,71 semanas cotizadas sean remitidos a PORVENIR S.A. en coordinación con el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y COLPENSIONES.

Con relación a la dependencia económica, partió destacando que la misma no tiene que ser total y absoluta de conformidad a la sentencia C-111 de 2006 de la H. Corte Constitucional y a reiterados pronunciamientos de la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia. Añadió que la dependencia económica no se desvirtúa por el simple hecho de que la persona que brinda el aporte haya laborado por periodos interrumpidos de tiempo, ya que lo determinante es que la ayuda tenga la entidad para cubrir los gastos de subsistencia de la persona a quien se apoya económicamente.

Hizo una valoración de la prueba practicada desechando la tacha de sospecha que se había propuesto por PORVENIR S.A. en contra de la única testigo escuchada en el debate probatorio.

Encontró que el ligero olvido de la demandante sobre algunos datos de los valores a que ascendían los gastos del hogar, se justifica en el hecho de su avanzada edad y en la circunstancia de que han transcurrido más de 10 años desde el deceso de su hijo, reseñando que, de todas maneras dio unos valores aproximados a los que equivalían los gastos de arrendamiento, servicios públicos y alimentación; advirtió coincidentes con los dichos de la demandante en el interrogatorio de parte con las declaraciones de la única testigo escuchada en el debate María Eugenia Estrada Valencia, resaltando que ninguno de los demás hijos de la demandante le ayudan económicamente, que solo vivía con el causante y que sus otros hijos tenían sus obligaciones aparte, existiendo incluso imposibilidad de que pudieran ayudarle económicamente a la madre; reseñó que en el proceso quedó evidenciada la dependencia económica, ya que la madre no pudo continuar llevando la vida que llevaba cuando estaba vivo su hijo, como quiera que ya no pudo estar en su casa de manera independiente bajo la protección de su hijo, y; cualificó la ayuda del hijo fallecido como determinante para la subsistencia de la madre, ya que era la ayuda con la que la madre se alimentaba, pagaba el arriendo y los servicios públicos, esto es, los gastos básicos.

Respecto a la ayuda que la madre recibía de su otro hijo Jorge Hernán, advirtió que también significaba un ingreso para la asunción de los gastos de la casa, que no alcanza a desvirtuar la dependencia económica que existía sobre el hijo fallecido.

Al encontrar reunidos los requisitos para el reconocimiento de la prestación, indicó que será la señora demandante la que deberá escoger cual es la modalidad de la pensión que desea percibir, y que una vez definido ello, será la AFP PORVENIR S.A. quien deberá realizar la liquidación de la mesada pensional.

En atención al monto de los aportes realizados por el causante, determinó que la pensión debía ascender al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad y se debía reconocer sobre 14 mesadas pensionales al año, teniendo en cuenta la fecha de causación y el parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005.

El análisis que hizo de la prescripción, consistió en que, si bien la muerte ocurrió el 1º de mayo de 2010, la pensión fue solicitada el 4 de junio de 2014 y el 11 de septiembre de 2014 se dio respuesta por parte de PORVENIR S.A., de lo cual derivó que, al haberse presentado la demanda el 1º de septiembre de 2017, el término extintivo trienal se debía contabilizar desde la fecha de la reclamación hacía atrás, encontrando prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 4 de junio de 2011.

El argumento que tuvo en cuenta para condenar a la entidad demandada a pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, consistió en que

VI. RECURSO DE APELACIÓN FORMULADO EN CONTRA DE LA SENTENCIA.

El apoderado judicial de PORVENIR S.A. recurrió la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria integral. Lo sustentó expresando que la actora no satisfizo el requisito de la dependencia económica para ser beneficiaria de pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo.

Citó sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia, como la SL14923 de 2014 y SL1448 de 2020, en las que se adocrinaron las características y requisitos propios de la dependencia económica, en cuanto debe ser cierta, con caracteres de contribución periódica y significativa, en función de otros ingresos, manifestando que en este caso no quedó probada la certeza, la periodicidad ni la magnitud del aporte económico del hijo.

Considera que, de la prueba practicada no es posible sostener que la señora demandante dependiere económicamente de su hijo fallecido, ya que ni siquiera quedó establecido a cuanto ascendían los ingresos y gastos del hogar, quedando acreditado que su otro hijo, el señor Jorge Hernán le brindaba un aporte económico por valor de \$200.000 y la tenía como beneficiaria en salud.

Del hecho de la intermitencia en las cotizaciones del hijo fallecido, deduce que este no tenía un trabajo e ingresos estables, razón por la cual la misma madre confesó que su hijo Jorge Hernán le colaboraba económicamente para atender los gastos de arrendamiento y de servicios públicos.

Hizo mención a la declaración de la señora María Eugenia Estrada Valencia, hija de la demandante, quien a su juicio no logró dar elementos de cercanía y convicción sobre el núcleo familiar, ya que solo refirió que su madre dependía de su hijo Abelardo, descartando de manera contundente la existencia de alguna otra ayuda económica de algún otro integrante de la familia y la subordinación de la madre a otros aportes y, expresamente respondiendo que ningún otro hermano del causante le colaboraba a la madre. Cuestionó la ciencia del dicho de esta testigo, al no dar motivos suficientes para tener conocimiento de porqué afirmaba que su madre dependía económicamente de su hermano, ya que no dio detalles sobre la supuesta dependencia. Ello lo deduce por ejemplo de respuestas como que creía que su hermano sí estaba laborando y que se ganaba el mínimo para el momento de la muerte y haber mostrado inseguridad e indeterminación para dar cuenta de a cuanto ascendían los gastos totales del hogar, o que Jorge Hernán solamente le aportaba en salud y le daba el dinero para comprar los medicamentos para tratar su enfermedad. Aunado a que, la testigo afirmó que era poco lo que veía al afiliado.

Llamó la atención de este colegiado, en el sentido de que frente al hijo Jorge Hernán, que no es el causante, sí se detallaron todas las circunstancias, modo y monto del aporte a la madre, sin que así ocurriera respecto del hijo fallecido.

Afirmó que la A quo no realizó un adecuado y activo procedimiento de valoración probatoria y se refirió a la prueba documental contentiva de la investigación administrativa realizada por PORVENIR S.A, como una muestra fehaciente de las verdaderas circunstancias de dependencia económica de la demandante. Bajo estas mismas consideraciones, considera que PORVENIR S.A. nunca incurrió en ninguna omisión legal al no reconocer la prestación, por lo que considera que tampoco puede existir condena al pago de los intereses moratorios.

Subsidiariamente, solicitó que, en caso de que se confirme el derecho, se permita la indexación de las sumas que a título de devolución de saldos por sobrevivencia le fue pagada a la demandante, conforme la compensación de estos aportes debe ser indexada para que se respalde la sostenibilidad financiera del sistema.

De otro lado, se opuso a la fórmula aplicada por la A quo para resolver la excepción de prescripción, dado el amplio interregno transcurrido entre la reclamación y la presentación de la demanda, reprochando que la contabilización se haya hecho luego de realizada la reclamación, cuando la demanda se presentó en un lapso superior a los 3 años luego de elevada la reclamación.

Finalmente, apoyándose en la validez y presunción de legalidad de la investigación administrativa, solicitó que se exonere a PORVENIR S.A. de la condena en costas procesales que se le impuso en primera instancia, al existir plena justificación de la presentación de los medios exceptivos por parte de PORVENIR S.A.

Alegaciones de conclusión en esta instancia:

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, los apoderados judiciales de las partes hicieron uso del derecho de presentar alegaciones.

La activa, solicitó se confirme la sentencia de primera instancia, argumentando que en el proceso quedó demostrado que el hijo de la demandante dejó causados los requisitos necesarios para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de su única beneficiaria, su madre, al haber dejadas cotizadas más de 60 semanas en los 3 años anteriores a su deceso, quedando claramente demostrada la dependencia económica que existía sobre el hijo fallecido.

Citó jurisprudencia para sustentar su postura e hizo mención a que la prueba de interrogatorio de parte en primera instancia, así como la declaración testimonial arrimada, resulta suficiente para tener acreditada la dependencia económica.

Por su parte, la Dra. Beatriz Lalinde Gómez, con tarjeta profesional de abogada Nro. 15.530 del CSJ, quien acredita las condiciones para asumir la representación judicial de PORVENIR S.A. dentro de este caso, hizo lo propio. A través de los alegatos formulados considera que el material probatorio allegado a la instancia resulta completamente insuficiente para derivar en el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. Añadió que en el debate no se acreditó el monto del aporte que supuestamente se le daba a la madre ni el carácter subordinante de esa suma para la subsistencia de la demandante; hizo mención a la intermitencia en las cotizaciones del asegurado y la ausencia de un trabajo estable a partir del cual se pudiese concluir que efectivamente existían esas condiciones de dependencia. Solicitó que se declaren probados los medios exceptivos propuestos y que se exonere a PORVENIR S.A. de las costas procesales impuestas.

Por su parte, la Dra. Yaneth Cifuentes Cabezas hizo lo propio, y a través de los alegatos de conclusión presentados, planteó la postura del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO frente al tema, reseñando que el bono pensional del causante ya fue emitido y redimido por la Oficina de Bonos Pensionales de esa cartera, en favor de PORVENIR S.A. y que, para que efectúe el reconocimiento y pago de una Pensión de Sobrevivientes en favor de la parte actora, la misma se financiaría de acuerdo con lo establecido en el

artículo 77 de la Ley 100 de 1993, con los recursos de la cuenta de ahorro individual, el valor del bono pensional que fue previamente Emitido y Pagado y con la suma adicional que se encuentra a cargo de la Aseguradora de Vida con la cual dicha AFP tenga contratado el seguro previsional. Conforme a tales argumentos, destacó que ese ministerio no tiene ninguna obligación pendiente dentro del presente caso.

La apoderada judicial de COLPENSIONES, Dra. Daniela Echeverry García, allegó escrito de alegatos de conclusión, mediante los cuales solicitó se confirme la decisión de primera instancia, al haber sido consecuente con las premisas normativas y legales que regulan el tema. Al efecto, citó jurisprudencia sobre la validez de la afiliación a las administradoras del RAIS cuando se cumplen los presupuestos legales respectivos, con total independencia de que se paguen oportunamente o no las cotizaciones a dicha administradora. Destacó que el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y COLPENSIONES ya cumplieron con las obligaciones relacionadas con el bono pensional e hizo hincapié en el concepto de efectividad de la afiliación.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. Pensión de sobrevivientes en el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad - Dependencia económica de la madre con relación al hijo fallecido (afiliado).

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis. Teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación, mismos que delimitan la competencia de la Sala en la segunda

instancia, los problemas jurídicos que debe resolver esta Magistratura consisten en determinar si la actora reúne los requisitos legales para ser considerada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, concretamente, si acredita la dependencia económica con respecto a su hijo.

Pues bien, a fin de dilucidar las normas con las cuales debe resolverse el asunto en cuestión, es claro que es la fecha de fallecimiento del afiliado la que determina la disposición legal que ha de gobernar el derecho a la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, ello por fuerza de la aplicación general e inmediata de la ley laboral en el tiempo, tal y como lo ha entendido de vieja data la jurisprudencia de la Corte en atención a lo directiva del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. (Ver entre otras la Sentencia del 20 de febrero de 2008, rad. N° 32649)

Es por ello, que la normatividad aplicable al caso concreto, teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento del afiliado (1º de mayo de 2010, según registro civil de defunción bajo indicativo serial Nro. 05762345, visible a folio 21 del PDF 1 del expediente digital), son los artículos 46, disposición a la que remite el artículo 73, y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que, en lo pertinente, indican:

ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

- 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,*
- 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:*
 - a) <Literal INEXEQUIBLE>*

PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que, a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.

ARTÍCULO 74. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.
<Expresiones "compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en letra itálica **CONDICIONALMENTE**
exequibles>

<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

...;

d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este;

...

PARÁGRAFO. *Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.*

Se resalta que el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, establece que la dependencia económica de padres a hijos debe ser total y absoluta, lo cual, por demás, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-111 de 2006. En dicha sentencia, advirtió la Corte que la dependencia económica se presenta cuando una persona demuestra: i) haber dependido de forma completa o parcial del causante; o ii) que a falta de la ayuda financiera del cotizante fallecido, habría experimentado una dificultad relevante para garantizar sus necesidades básicas, es decir, la dependencia económica se predica del que habría echado de menos los aportes del causante para satisfacer las necesidades básicas, en caso de la ausencia de éstos.

En esa oportunidad el alto tribunal constitucional identificó varias reglas jurisprudenciales que permiten determinar si una persona es o no dependiente económicamente de otra, que se pueden sintetizar en los siguientes términos:

“1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.

2.El salario mínimo no es determinante de la independencia económica.

3.No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.

4.La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.

5.Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes.

6.Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica”.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral ha reseñado respecto a la dependencia económica de los padres, en sentencia con radicación No. 25.069 de 2.006:

“Este criterio de dependencia económica tal como lo ha concebido la Corte bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación a que se refiere la norma. Sin embargo, resulta claro que sólo puede ser definida en cada caso concreto”.

Y en sentencia SL 2490 de 2019, radicación No. 72950, ese alto tribunal indicó:

“Luego entonces, resulta claro que no cualquier contribución hecha por un hijo a las finanzas de su padres, tiene la capacidad de hacerlos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, pues para ello, se insiste es necesario que dependan económicamente de aquel, por lo que la Corte, ha indicado que si bien la dependencia no deba ser total y absoluta «(...) no significa que cualquier estipendio que se le otorgue a los familiares pueda ser tenido como prueba determinante para ser beneficiario de la pensión, pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio, ni menos con el establecimiento en el sistema de seguridad social, cuyo propósito, se insiste, es servir de

*amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas» (CSJ SL4811-2014).
(...)*

En igual sentido, la Corte ha indicado los presupuestos que deben darse, para que se pueda predicar la dependencia económica de los padres respecto del hijo fallecido, y en tal virtud ser beneficiarios de la prestación pensional de sobrevivencia. Así en sentencia CSJ SL14923-2014, se dijo:

En tales términos, aunque no debe ser total y absoluta, en todo caso, debe existir un grado cierto de dependencia, que la Corte ha identificado a partir de dos condiciones: i) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo.

En conclusión, depender económicamente de alguien, supone un criterio de necesidad, un sometimiento o sujeción al auxilio recibido de tal manera útil e imprescindible que, de no obtenerlo, se pondría en peligro la subsistencia del subordinado al no poder sufragar los gastos diarios.

Y en materia de pensión de sobrevivientes, ha estimado la jurisprudencia del trabajo que la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a los padres-demandantes y, al demandado, el deber de desvirtuar esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica de los padres para solventar sus necesidades básicas. Así lo ha expuesto la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como puede verse entre otras, en la sentencia del 24 de noviembre de 2009, con radicado 36.026, en la cual dejó sentado que:

“Es importante precisar que a la demandante que pretende obtener la pensión de sobreviviente en su calidad de madre del causante, es a la que, en principio, le corresponde probar, por cualquier medio de los legalmente autorizados, su dependencia económica del occiso, y cumplido lo anterior, será el demandado quien deberá demostrar dentro de la contienda judicial, la existencia de ingresos o rentas propias de la ascendiente que le permitan ser autosuficiente.”

Caso Concreto:

Sin que exista ninguna duda en cuanto a la fecha del deceso del causante y la normativa que resulta aplicable al caso concreto, es pertinente reseñar que, en cuanto al requisito de la densidad de semanas, aunque este tema no fue objeto de apelación por PORVENIR S.A., no sobra destacar, teniendo en cuenta que es pertinente advertir un cumplimiento cabal de los requisitos legales para el reconocimiento de la prestación reclamada que, de acuerdo al reporte de semanas cotizadas, tanto en el entonces Instituto de los Seguros Sociales (historia laboral de folios 23 al 31 del PDF 1 del expediente digital), como con la historia laboral en PORVENIR S.A. (fl. 32), el causante reúne 60 semanas en los 3 años anteriores a su deceso, esto es, entre el 1º de mayo de 2007 y el 1º de mayo de 2010.

Con relación al requisito de la dependencia económica, PORVENIR S.A. emitió comunicado el 11 de septiembre de 2014 (fl 33 del PDF 1 del expediente digital), a través del cual le informó a la peticionaria: *“... usted no dependía del afiliado de la referencia, por cuanto el requisito de la dependencia económica se acredita solo en la medida en que los padres demuestren que la ayuda económica de su hijo fallecido a los gastos del núcleo familiar era de tal importancia, que sin ella no pueden subsistir de manera digna, como en el caso que nos ocupa no se demostró tal circunstancia...”*.

Dentro de las pruebas documentales allegadas, obra a folios 40 y 41 del PDF 1 del expediente digital, una declaración extraproceso rendida el día 9 de marzo de 2011 ante la Notaría Única de Sabaneta, esto es, 10 meses después de la muerte de su hijo, en la que la señora EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ indicó:

“SOY LA MADRE DEL SEÑOR ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 15.349.187 DE SABANETA ANTIOQUIA, EL CUAL FALLECIÓ EL DÍA 1 DE MAYO DE 2010. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE MI HIJO ABELARDO ANTONIO VIVÍA CONMIGO BAJO EL MISMO TECHO Y ERA QUIEN ME ASISTÍA ECONÓMICAMENTE, YA QUE SOY AMA DE CASA Y NO RECIBO INGRESOS, PENSIÓN NI RENTA POR PARTE DE NINGUNA OTRA PERSONA. MANIFIESTO BAJO JURAMENTO QUE MI HIJO ABELARDO

ANTONIO ERA SOLTERO Y NO TENÍA HIJOS ADOPTIVOS, RECONOCIDOS NI POR RECONOCER...”.

También se observa en el PDF 1 del expediente digital, a folios 42 y 43 una declaración rendida el 10 de abril de 2012 ante la Notaría Única de Sabaneta por las señoras GLORIA AMPARO HERNANDEZ CANO y OLGA DEL SOCORRO OSPINA AGUDELO, quienes declararon bajo la gravedad del juramento:

“SABEMOS Y NOS CONSTA QUE LA SEÑORA EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZALEZ... DE SESENTA Y SEIS (66) AÑOS DE EDAD, ES LA MADRE DEL SEÑOR ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA, QUIEN FALLECIÓ EL 1º DE MAUO DE 2009 (sic)... SABEMOS Y NOS CONSTA QUE LA MADRE LA SEÑORA EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZALEZ, ES AMA DE CASA Y DEPENDÍA ECONÓMICAMENTE DE UN TODO DE SU HIJO EL SEÑOR ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA, SABEMOS Y NOS CONSTA QUE EL SEÑOR ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA ERA QUIEN VELABA Y ASISTÍA ECONÓMICAMENTE POR SU MADRE... VIVÍA CON SU MADRE... ERA SOLTERO Y NO SE CASÓ NI POR LO CIVIL NI POR NINGÚN TIPO DE RELIGIÓN... NO TUVO HIJOS ADOPTIVOS, RECONOCIDOS NI POR RECONOCER... NO CONOCEMOS OTRAS PERSONAS CON IGUAL O MEJOR DERECHO PARA RECLAMAR QUE SU MADRE LA SEÑORA EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZALEZ...”.

A folios 87 y siguientes del PDF 1 del expediente digital se observa un documento aportado en copia por PORVENIR S.A., denominado **“INFORME DE INVESTIGACIÓN PARA EL PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS”**, realizado el 26 de julio de 2014 por la firma investigadora de las condiciones familiares de la demandante, labor realizada *a través de los medios “Verificación documental”, “Verificación telefónica”, “Entrevista” y “Gestión de campo”*. De dicho documento se destaca:

- Que se cercioraron de que la labor normal que desempeñaba el señor ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA era la de **“OBRERO DE CONSTRUCCIÓN”** y llevaba 10 años en su labor.
- Existe un reporte de información laboral, donde se reitera: *“el afiliado se desempeñó por última vez como obrero de construcción de manera independiente durante 10 años”*.

- Existe un análisis del núcleo familiar del fallecido, en los siguientes términos:

“La gestión permite determinar que el Sr. Abelardo Antonio Estrada Valencia no tenía matrimonio ni uniones maritales de hecho vigentes al momento de su deceso, tampoco hijos; vivía con la Señora Emma de Jesús Valencia González (madre) quien recibía aportes esporádicos del afiliado, puesto que se ha desempeñado como ama de casa, por lo cual sufraga los gastos del hogar realizando oficios varios y mediante los aportes de sus dos hijos de nombres Jorge Hernán y Juan Carlos Estrada Valencia de 45 años ambos, de igual forma, se valida que no es propietaria de inmuebles, tampoco recibe pensiones (sin acceso a bases de datos de régimen especial). Adicionalmente se corrobora que el padre del afiliado, de nombre Abelardo de Jesús Estrada Saldarriaga se encuentra fallecido...”.

- Se detalla la fuente Referencias, en las que se lee: *“A partir de contacto con los Sres. Juan Carlos Estrada Valencia con los abonados telefónicos 4 – 5881306 / 314 859 34 87 y María Mercedes Raigosa Villa con Nro. 4 – 288 69 22 / 288 12 02 (hermano y amiga del afiliado respectivamente), se corrobora la información anterior”.*
- Se dejó consignado que *“Emma de Jesús Valencia González reporta afiliación en salud en la EPS Sura como beneficiaria de su hijo Jorge Hernán Estrada Valencia...”.*
- Y el informe de investigación cierra con la siguiente conclusión:

“Analizados los documentos presentados, las consultas y validaciones practicadas, se concluye que la información del expediente es CONFIABLE y se puede establecer que no se encontró la existencia DE BENEFICIARIOS diferentes de los registrados en el presente informe”.

Haciendo una valoración integral de las pruebas arrojadas al debate probatorio, esta sala encuentra que la decisión de la juez de primera instancia

es acertada, como quiera que, no se advierte que la decisión se haya sustentado únicamente en la declaración de la testigo María Eugenia Estrada Valencia, hija de la demandante y hermana del causante, quien, a juicio del apoderado judicial de PORVENIR S.A. no aportó las probanzas suficientes para que se pudiese soportar la existencia de una dependencia económica subordinante de la madre al hijo.

Al respecto, es preciso reseñar que, no obra en el plenario únicamente la declaración de la referida testigo, sino que existen también pruebas documentales como las referidas en precedencia para concluir que el aporte económico que el hijo ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA le daba a su madre era de la suficiencia, entidad e idoneidad para incidir en su sostenimiento económico.

En efecto, es la misma investigación administrativa adelantada por PORVENIR S.A. la que arroja luces de esas circunstancias de dependencia económica, al dar cuenta de un grupo familiar conformado por la madre, una persona de la tercera e edad no dependiente de ningún subsidio o ayuda económica por parte del estado y, el hijo ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA, que era quien velaba por su sustento.

Esta sala no encuentra que los dichos de la testigo María Eugenia Estrada Valencia hayan sido indeterminado o confusos, ya que la deponente fue clara en manifestar lo siguiente:

“Cuando Abelardo murió vivía con mi mamá.

Abelardo trabajaba construcción y le daba a mi mamá para los gastos de la casa.

Él era el que veía económicamente por ella, él le daba todo: la vivienda, el alimento, todo.

Abelardo nunca tuvo mujer, ni hijos ni nada.

Abelardo no tenía fija la salud porque eran trabajos intermitentes, entonces debido a eso mi hermano la afilió a salud.

Abelardo trabajaba prácticamente para ella. Jorge solamente le aportaba la salud, porque Abelardo no tenía trabajo estable.

Creo que Abelardo ganaba el mínimo.

Abelardo siempre trabajaba en construcción, en algunas oportunidades quedaba varado, porque él no tenía un trabajo fijo de durar dos o tres años en una empresa, pero trabajaba en construcción.

Él trabajó también en la empresa de jabón DERSA y en una empresa de maíz en la Minorista...”.

Nótese cómo estas manifestaciones guardan una clara y correcta coherencia y concordancia con los elementos que se pueden derivar de la investigación administrativa que PORVENIR S.A adelantó en el grupo familiar del fallecido en el año 2014, como quiera que no existe ninguna duda de que, al momento de la muerte de ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA este vivía con su madre y eran los dos integrantes de la familia, circunstancia que, bajo las reglas de la experiencia y de la sana crítica denota una relación de dependencia y acompañamiento, al tratarse de una relación de parentesco madre-hijo, siendo la madre una persona de la tercera edad dedicada por completo a las labores de la casa, viviendo en una casa bajo arrendamiento y sin que tuvieren un ingreso suficiente proveniente de otra fuente distinta a la actividad laboral del hijo.

También coinciden los dichos de la testigo con la conclusión a la que llegó la investigación administrativa, en cuanto *“Abelardo trabajaba construcción y le daba a mi mamá para los gastos de la casa”* y, es que dicha investigación no desconoce que el hijo sí suministraba a la madre una ayuda, llegando incluso a la conclusión de que Abelardo llevaba diez años dedicado a la labor de la construcción, aspecto sobre el cual también la testigo coincidió.

Son concordantes también los dichos de la testigo con las conclusiones de la investigación administrativa de la entidad, en cuanto a que el hijo no tenía hijos ni compañera sentimental, esposa o relación amorosa que permitiera pensar que atendía obligaciones familiares por fuera del hogar materno.

Ahora, con relación a la manifestación del apoderado judicial de PORVENIR S.A. en su recurso de alzada, conforme a la cual insiste en que es imposible que existiere dependencia económica entre madre e hijo, teniendo en cuenta que, en las cotizaciones del hijo fallecido, se deduce que este no tenía un trabajo e ingresos estables, debe decirse que ello no es cierto, ya que es la misma investigación administrativa realizada por PORVENIR S.A. la que concluye que durante los 10 años anteriores al deceso del causante, este estuvo dedicado a las actividades de la construcción.

Ahora, si bien, en la historia laboral en PORVENIR S.A. se advierte que el señor ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA se trasladó a esta entidad proveniente del entonces INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES en julio de 2009, siendo dependiente del empleador Concypa, como lo acepta la entidad demandada, no resulta indicativo de que nos encontremos frente a una persona que haya estado al margen de la actividad laboral subordinada, como quiera que, si se revisan integralmente las pruebas, también puede corroborarse que el señor ESTRADA VALENCIA se desempeñaba desde enero de 1993 al servicio de varios empleadores, manteniendo una razonable permanencia en sus distintos empleos con los patronos JAIRO DE JESÚS LOAIZA PÉREZ, TRILLADORA Y ABARROTES EL VENCEDRO, MARÍA TERESA ARISTIZABAL, EFRAIN ARIAS GALLEG0, JAIRO RAMIREZ, JOSÉ ARTURO GÓMEZ MUÑOZ, JAIME ISAZA GÓMEZ, FERNANDO AGUDELO, CARLOS ARTURO CARDONA CORREA, JUAN CARLOS CASTAÑO, JULIO DE JESÚS VÉLEZ, RUBEN DARÍO POSADA CASTAÑEDA, ARLEY DUVAN LOAIZA ALCARAZ, CONCYPA, entre otros, repitiendo incluso periodos con algunos de esos mismos empleadores.

Luego entonces, esa afirmación de la pasiva en su recurso de alzada a partir de la cual pretende desvirtuar que el señor ESTRADA VALENCIA se desempeñaba con cierta permanencia y continuidad al servicio de varios empleadores privados, no es cierta.

Es importante contextualizar el aporte que el hijo daba a la madre, del cual no existe ninguna duda sobre su existencia y periodicidad, partiendo de

que esa ayuda no era esporádica, indeterminada, casual e incierta, sino que se trataba del aporte que efectivamente le permitía a la madre asumir su manutención y el mantenimiento del hogar.

Ahora, la parte recurrente se escuda en que supuestamente en el debate probatorio no se determinó con ribetes de precisión y cuantificación cuál era el aporte económico que percibía la madre de parte del hijo; no obstante, esta sala no encuentra que esa indeterminación haya en realidad existido, si se tiene en cuenta que la testigo María Eugenia Estrada Valencia sí precisó que aproximadamente los gastos de arriendo de la casa ascendían a la suma de \$300.000, los cuales asumía el hijo, además de pagar los gastos de alimentación y de servicios públicos, manifestaciones que resultan coincidentes con las manifestadas por la demandante en el interrogatorio de parte. Al respecto, es preciso añadir que no resulta ser un detalle menor el que el debate probatorio se esté adelantando más de 10 años después del deceso del causante, lo cual, sin llegar a sostener que constituya una excusa para obtener datos certeros y cercanos a la realidad, sí se trata de una circunstancia que razonablemente permite formar un convencimiento sobre unas circunstancias familiares y económicas reales, a las que precisamente se llegó en el debate, y las cuales no arrojan duda acerca de que efectivamente el hijo sí daba una ayuda determinante a la madre.

El apoderado judicial de PORVENIR S.A. expresó que la importancia y entidad del aporte del hijo se desvirtúa por la ayuda que la madre recibía de otro de sus hijos, el señor JORGE HERNÁN, tal y como quedó probado en el juicio. Esta sala advierte que, efectivamente en el proceso quedó acreditado que la señora EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ, en vida de su hijo ABELARDO, también recibía el apoyo económico de su hijo JORGE HERNÁN, quien incluso la tenía afiliada como beneficiaria al sistema de salud, no obstante, no resulta pertinente que se piense que por el simple hecho de que una madre reciba el apoyo de uno o varios de sus hijos, ello signifique que no exista dependencia económica respecto al hijo que sí vivía con ella y quien asumía las principales obligaciones de la familia, es evidente que el tema de la seguridad social no riñe con el derecho de alimentos que los ascendientes

tienen respecto a sus ascendientes cuando se cumplen las condiciones de capacidad económica del alimentante y necesidad del alimentario. No resulta de recibo que se cualifique como inane o insignificante la ayuda del hijo soltero, trabajador, conviviente con la madre, por el simple hecho de que exista una ayuda de uno o dos de los otros hijos y que incluso la madre goce del beneficio de la seguridad social en salud en calidad de beneficiaria a cargo de uno de ellos.

Conforme a las anteriores consideraciones, concluye esta sala que no le asiste razón al apoderado judicial de PORVENIR S.A., ya que sí se encuentran comprobadas las circunstancias fácticas de dependencia económica suficiente para que se pueda predicar que la señora EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo ABELARDO ANTONIO ESTRADA VALENCIA, en tanto las probanzas fácticas se corresponden con los criterios de suficiencia y significación del aporte económico para poder sostener que la madre dependía económicamente de su hijo, para el momento del deceso. Así las cosas, se confirmará el reconocimiento pensional.

Intereses Moratorios:

El apoderado judicial de PORVENIR S.A. también recurrió la decisión de que se hubiere condenado a la entidad demandada al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, argumentando que la administradora actuó con fundamento en los resultados de la investigación realizada, emitiendo un comunicado mediante el cual negó el reconocimiento de la pensión reclamada, el cual estima prevalido de la presunción de legalidad y acierto.

Al respecto, esta sala no accede a esas argumentaciones, teniendo en cuenta que la entidad, contrario a lo esbozada en la alzada, sí incurrió en una omisión legal al haber negado la prestación, configurándose el supuesto de hecho del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, haciéndose imperiosa la consecuencia jurídica del pago de dichos intereses conforme al artículo 1º de la

Ley 717 de 2001, esto es, dos meses después de que se elevó la solicitud pensional. En consecuencia, se confirmará la orden de pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Prescripción:

En lo que tiene que ver con la prescripción de mesadas aplicada por la A quo, conforme a la cual encontró prescritas las mesadas pensionales adeudadas a la demandante, anteriores al 4 de junio de 2011, esto es, tres años antes de que elevara la solicitud el 4 de junio de 2014, esta sala encuentra que le asiste razón al recurrente. En efecto, se duele la pasiva de que, si bien el 4 de junio de 2014 se interrumpió la prescripción de mesadas con la reclamación, ese fenómeno se habría vuelto a presentar al haber dejado transcurrir más de 3 años y concurrir a presentar la demanda el 12 de septiembre de 2017.

Al respecto, es preciso citar el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo que establece que *“el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción **por una sola vez**, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente”*.

En consecuencia, el 4 de junio de 2014 se interrumpió con la reclamación el fenómeno extintivo, volviendo a empezar a contabilizarse los 3 años de ley, los cuales se cumplieron el 4 de junio de 2017, y la demanda solo vino a presentarse el 12 de septiembre de 2017, lo que supone que legalmente debe contabilizarse los tres años de la prescripción extintiva de mesadas, desde la presentación de la demanda hacía atrás y no desde la fecha de la reclamación.

Así las cosas, las mesadas no afectadas por el fenómeno extintivo se pagarán **desde el 12 de septiembre de 2014** y no desde el 4 de junio de 2011, como equivocadamente los determinó la A quo.

Cuantificación del Retroactivo:

Se aplicará el valor del salario mínimo legal mensual vigente, ya que sobre ese salario versó la condena y se trata de un aspecto no recurrido por las partes.

El monto del retroactivo pensional se extenderá hasta el 30 de junio de 2022, teniendo en cuenta que el inciso 2º del artículo 283 del Código General del Proceso, que establece que *“el juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado”*.

RETROACTIVO ADEUDADO POR SEPTIEMBRE DE 2014:	\$369.600
4 MESADAS ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2014 Y ADICIONAL:	\$2.464.000
14 MESADAS DEL AÑO 2015:	\$9.020.900
14 MESADAS DEL AÑO 2016:	\$9.652.370
14 MESADAS DEL AÑO 2017:	\$10.328.038
14 MESADAS DEL AÑO 2018:	\$10.937.388
14 MESADAS DEL AÑO 2019:	\$11.593.624
14 MESADAS DEL AÑO 2020:	\$12.289.242
14 MESADAS DEL AÑO 2021:	\$12.719.364
7 MESADAS CAUSADAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022:	\$7.000.000

TOTAL RETROACTIVO PENSIONAL ADEUDADO (entre 12 de septiembre de 2014 y 30 de junio de 2022): \$86.374.526

A partir del 1º de julio de 2022, PORVENIR S.A. deberá continuar pagando a la demandante una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, sobre 14 mesadas pensionales al año.

En punto a la apelación subsidiaria formulada por el apoderado judicial de PORVENIR S.A., referida a su solicitud de que se modifique la facultad que se concedió a la entidad en el numeral 7º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, debiendo incluir la indexación de la devolución de saldos y/o indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes pagada en su momento a la demandante, esta sala encuentra que le asiste razón al

recurrente, en tanto resulta pertinente que la reintegración de estas sumas (que operará bajo la modalidad de pago parcial descontando lo ya pagado del valor adeudado a título de retroactivo pensional), se haga debidamente actualizada, esto es, con el mecanismo de la indexación que corrige la depreciación monetaria, indexación que deberá ser calculada desde el momento en que se pagó ese valor hasta el momento en que se dé aplicación a la operación aritmética que permita tener por descontado ese valor.

Por todo lo anterior, **se confirmará** el reconocimiento pensional y la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 la sentencia de primer grado, y **se modificará** el monto del retroactivo pensional reconocido, el cual se contabilizará desde el 12 de septiembre de 2014 y, los términos en que se ordenó descontar el pago de la devolución de saldos para incluir la indexación de tales rubros.

Finalmente, con relación a la solicitud que hizo el apoderado judicial de PORVENIR S.A. en el recurso de apelación, consistente en que se revoque la condena en costas procesales que le fue impuesta a la entidad en primera instancia, no se accederá a dicha petición, teniendo en cuenta que no resulta ser un argumento suficiente para acceder a dicha exoneración de agencias en derecho el hecho de que supuestamente la decisión de la entidad de negar el derecho, emitida el 11 de septiembre de 2014, se encuentre dotada de la presunción de legalidad y acierto. Al respecto, resulta oportuno dar aplicación al criterio objetivo contenido en el artículo 365 del Código General del proceso sobre la condena en costas procesales a la parte que resulte vencida en el juicio, sin tener que adentrarse en consideraciones distintas a esa procedencia. No sobra destacar que PORVENIR S.A. tuvo a su disposición en el momento oportuno todas las pruebas y elementos de convicción suficientes para que hubiere adoptado la decisión correspondiente. En consecuencia, se mantendrá la condena en costas de primera instancia.

Costas procesales de segunda instancia:

En esta instancia no se han causado costas procesales, teniendo en cuenta que ha prosperado parcialmente la apelación formulada por el apoderado judicial de PORVENIR S.A.

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, de fecha y origen conocidos, que se conoce en Apelación, en cuanto reconoció un retroactivo pensional por valor de \$106.993.592, causado entre el 4 de junio de 2011 y el 31 de enero de 2022 para, en su lugar **CONDENAR** a **PORVENIR S.A.** a que reconozca a la señora **EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ** un retroactivo pensional por valor de *(ochenta y seis millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos veintiséis pesos)* **\$86.374.526=**, causado entre el 12 de septiembre de 2014 y el 30 de junio de 2022. Y **ORDENAR** a **PORVENIR S.A.**, a que, desde el 1º de julio de 2022 y en lo sucesivo, continúe pagando a la señora VALENCIA GONZALEZ una mesada pensional por valor del mínimo legal mensual vigente, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 8º de dicha sentencia, a efectos de que se entienda que se encuentra prescritas todas las mesadas pensionales causadas en favor de la demandante con anterioridad al 12 de septiembre de 2014, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: MODIFICAR el numeral 7º de esa misma sentencia, a efectos de que se entienda que la autorización para descontar las sumas pagadas a la señora **EMMA DE JESÚS VALENCIA GONZÁLEZ** a título de

devolución de saldos, deberá hacerse debidamente indexada, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

CUARTO: CONFIRMAR dicha decisión en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

QUINTO: ABSTENERSE de imponer condena en costas procesales

SEXTO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

SÉPTIMO: Se ordena la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada